

La sociedad civil, cada vez más activa.

La Plataforma por la España Constitucional, impulsada por la Fundación Libertad y Alternativa, ha sido el promotor de las recientes y populosas concentraciones de Madrid celebradas durante 2023 y 2024, en la Puerta del Sol, Cibeles, Plaza de Castilla... contra el autoritarismo de Sánchez y en defensa de la Nación española, la Constitución y las libertades ciudadanas. A ellas nos hemos adherido más de 100 entidades de la sociedad civil de diversos lugares de España entre las que se encuentra el Club Liberal Español. La sociedad civil es la integrada por personas que no están en la política partidista, sino que desean crear opinión, dar la batalla cultural y defender los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político en una España unida. Exactamente lo contrario a lo que hace Sánchez para mantenerse en el poder sin que le importe implantar un estado confederal, desmontando pieza a pieza la Constitución y haciendo desiguales a los españoles según la región en la que viva.

Otras entidades también se mueven. El pasado 21 de diciembre de 2024, escuché por casualidad una interesante entrevista en la COPE a la abogada española Miriam González Durántez, esposa del político liberal demócrata inglés Nick Clegg, que fue Viceprimer Ministro de Gran Bretaña en el gobierno de Coalición del conservador Cameron en la década 2010. Miriam González ha creado la Fundación “España mejor” (a pesar de que vive en California) preocupada por nuestro país, para dinamizar la Sociedad Civil Española para que se involucre con propuestas de políticas públicas.

Enumeró algunos problemas de nuestra joven Democracia que no son habituales en las democracias maduras europeas o en el Reino Unido; son los que diariamente comentamos los españoles: la corrupción política, la falta de ética pública y la pérdida de prestigio de las instituciones por no servir de contrapoder del poder.

Sobre la corrupción recordó que, de modo recurrente se descubren en España actividades de algún político del partido político gobernante para enriquecerse a costa del dinero público, es decir, de todos. Ocurrió con políticos del PP; antes y ahora, con otros del PSOE o con políticos nacionalistas, influyendo en la adjudicación de contratos públicos. Esto exige reforzar las normas de contratación del Sector Público, la transparencia, y tener un Código Penal que disuada las tentaciones...

Precisamente ahora en España, diversas personas del entorno familiar y político del presidente Sánchez están imputados por los jueces por casos de presunta corrupción y tráfico de influencias. Las querellas las han iniciado entidades de la Sociedad Civil sin que aluda a ello el Fiscal General del Estado que se ocupa en defenderse de su disparatado caso por la presunta revelación de secretos de un expediente fiscal de un ciudadano al que ataca por razones políticas.

Comentaba la Sra. González Duránte que en España no se conoce la corrupción administrativa que “quita multas de tráfico” ... pero que existe, una corrupción de mayor cuantía por falta de leyes adecuadas y controles eficaces. Por ello, empresas con importantes proyectos dejan de invertir en España. En resumen, nuestro sistema legal debe mejorar las normas de contratación dando total transparencia a los procesos de adjudicación y de “modificación o reformados”.

Otro aspecto que denunció a modo de ejemplo, es la carencia de un Código Ético de gobierno, como existe en los países europeos, que exige que en las reuniones de los políticos que negocian entre sí o con terceros temas económicos (contratos, subvenciones, ayudas...) asista, por imperativo legal, un funcionario especializado en la materia y, asimismo, comentó que le extrañaba la pasividad de algunos funcionarios públicos en los procedimientos de contratación, cuando deben ser escrupulosos en la observancia de la legalidad.

También comentó la necesidad de que los partidos políticos estén sometidos a un régimen legal de responsabilidad penal y administrativa por ser instituciones esenciales en una democracia por lo cual, sus cuentas deben ser controladas profesionalmente por auditores e instituciones.

Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español